

El Salvador proceso

informativo semanal

año 12
número 498

diciembre 11
1991

ISSN 0259-9864

centro universitario de documentación e información

- La debacle del gobierno
- Desescalamiento de la actividad bélica
- La marcha de la negociación: otra vez a Nueva York
- Encuesta del IUDOP: Los salvadoreños ante los procesos de privatización y de paz en el país

La debacle del gobierno

Los vertiginosos cambios experimentados en el mundo y la creciente interdependencia económica, han hecho del prestigio y la credibilidad de los gobiernos factores cada vez más determinantes para la sobrevivencia económica y la aceptación internacional. El mismo fin del comunismo ha terminado con toda suerte de consideraciones para con Estados violadores de los derechos humanos por razones ideológicas o de alineamientos entre bloques. Desafortunadamente, el gobierno de ARENA y los militares parecen seguir viviendo y reviviendo a toda costa la mejor época de la guerra fría. Y lo que es más grave, no parecen capaces de encontrar autojustificación e identidad que no sea la que les proporciona su violento anticomunismo.

No haber encarado y reconocido esta nueva realidad a su debido tiempo, retrasando el inicio de una profunda transformación de sus normas y conductas ante el pueblo y la comunidad internacional, ya ha puesto al gobierno salvadoreño en una situación de profundo descrédito de graves consecuencias.

En la última semana, durante reunión cumbre ordinaria, la Comunidad europea incluyó a El Salvador en la lista de países violadores de los derechos humanos, con el agravante de que ello implica la exclusión del país como sujeto receptor de ayudas de ese importante bloque económico. Más aún, la Comunidad se ha adelantado al declarar que no se trata de ninguna injerencia en asuntos internos de otros países, sino de su derecho a reconocer y ayudar a los que se hacen acreedores según sus propios criterios de respeto a los derechos humanos.

Tal resolución es solamente la primera de las que se avecinan, de continuarse con el nacionalismo barato con que tratan de disfrazarse el crimen y la impunidad oficial reinantes. Pronto el Congreso norteamericano resolverá sobre la suspensión del financiamiento militar a El Salvador, convencido en su mayoría del origen institucional del crimen perpetrado contra los jesuitas de la UCA, y desengañado con la parodia de justicia montada por las autoridades salvadoreñas. El gobierno español se ha pronunciado en términos similares al juicio emitido por el congresista Moakley en contra de los generales y coroneles involucrados en el asesinato de los sacerdotes, y lo mismo ha hecho un importante sector del parlamento británico. El mismo descontento fue recogido en la última resolución de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en El Salvador, en la que se insta al gobierno a continuar la investigación sobre el involucramiento de otros probables responsables. Ningún gobierno puede aspirar al respeto y la credibilidad internacional desafiando una verdad tan contundente y encubriendo a los autores intelectuales del asesinato en el Alto Mando en la Fuerza Armada.

No es que se trate únicamente de un gobierno torpe, incapaz de percatarse y reaccionar ante la debacle a que se precipita. A su insensibilidad contribuye el excesivo y estridente militarismo en el que se haya inmerso, y del que además de beneficiario también es víctima. Contraproducente ha terminado siendo también el servil alineamiento progubernamental y la excesiva ideologización de la mayoría de los principales medios de comunicación, que con diversos grados de historicismo procuran embozar la realidad. Y peor ha sido que el mismo gobierno haya creído que en estos medios se consume y aprisiona toda la realidad y la opinión nacional y mundial.

Es en tales condiciones estructurales como la inmoralidad, la torpeza y la impunidad se reproducen, autojustifican y hasta se elevan a valores del Estado y de sus funcionarios. No otra cosa es lo que ha posibilitado el extremo cinismo e irracionalidad con que el juez ejecutor, nombrado para el asesino de la masacre de San Sebastián, se ha pronunciado declarando ilegal la detención del principal responsable, el mayor Beltrán Granados, aduciendo que la previa exoneración de los obedientes hechores materiales implica necesariamente la inocencia del autor intelectual, aun existiendo la declaración de un testigo presencial que se resistió a obedecer la orden criminal.

Entre la población, el descrédito del gobierno es aún peor, revelándose altos niveles de rechazo en casi todos los ámbitos de su actuación. Sobre el caso jesuitas en particular, la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA indica que sigue siendo masivo el interés que la población mantiene en el esclarecimiento de la masacre. El 74 por ciento de los entrevistados declaró haberse enterado de la vista pública celebrada sobre el caso. Y más de la mitad de éstos aseguró haber acompañado el proceso por la televisión nacional.

El 75 por ciento de quienes conocieron el veredicto son del parecer que todavía hay mucho por investigar en el caso, mientras que el 62.4 por ciento manifiesta la creencia de que existen otros responsables que todavía no han sido llevados ante la justicia. Y es éste el caso en el que la justicia salvadoreña asegura haberse anotado el mayor éxito de su historia.

Iguales niveles de rechazo e inconformidad popular se evidencian contra la política económica y contra la gestión administrativa del gobierno, con la única excepción del proceso de paz, en el que un 19 por ciento de los entrevistados le atribuyen los logros de los acuerdos de Nueva York.

El gobierno, pues, ya ha entrado en una aguda espiral de descrédito nacional e internacional. No es posible ir todo el tiempo contra las evidencias y contra la verdad. Después de todo, quizá una pronta firma del cese de fuego con el FMLN sea el único freno al aislamiento y a la debacle que se acerca. Ojalá al menos esto ya lo hayan comprendido.

Desescalamiento de la actividad bélica

En los últimos días, la dinámica militar ha experimentado un relativo desescalamiento, el cual ha acompañado el desarrollo de las negociaciones de paz en su etapa final. Aunque de manera frágil, la suspensión unilateral de sus acciones ofensivas decretada por la comandancia general del FMLN se ha mantenido vigente. A ello ha contribuido, en menor medida, el que el gobierno pusiera en vigor la suspensión de los bombardeos aéreos y del uso de artillería pesada. Sin embargo, la guerra ha continuado siendo una constante en la vida de la nación, sobre todo en las tradicionales áreas conflictivas, pues los operativos contrainsurgentes del ejército, a pesar de haber disminuido, no han cesado.

La Fuerza Armada, amparándose en una vacía obligación constitucional, ha justificado la continuación de sus campañas ofensivas manteniendo una actitud de rechazo y provocación a la tregua insurgente (**Proceso 497**). Según voceros del FMLN, en el período comprendido entre el inicio de la tregua rebelde hasta el 1 de diciembre, la Fuerza Armada ha realizado 38 operativos ofensivos y 11 ataques artilleros y se registraron 28 combates de encuentro, con un saldo para el ejército de 40 bajas. Todo esta actividad militar se ha suscitado en zonas de presencia rebelde en por lo menos ocho departamentos del país. Los reportes de COPREFA, por su parte, señalan que, a lo largo de noviembre, la actividad militar registró 27 combates de encuentro y 25 ataques rebeldes. Ello ocasionó 47 bajas (25 muertos y 22 heridos) entre los efectivos de la Fuerza Armada y 94 bajas (36 muertos y 58 heridos) entre los combatientes del FMLN.

Una evaluación objetiva de las tendencias experimentadas por la dinámica militar,

con todo, muestra que los esfuerzos para desescalar el conflicto están ya puestos en marcha y, previsiblemente, se profundizarán a medida que el proceso de negociación alcance definiciones finales. De hecho, en los primeros días del presente mes de diciembre, aun cuando han persistido los combates entre las fuerzas contendientes, su intensidad ha experimentado una sensible disminución, manifiesta en el bajo número de bajas registradas entre ambos bandos.

Valoraciones contrapuestas de la tregua unilateral

Si bien en el terreno militar los esfuerzos de moderación están ofreciendo ya frutos positivos, en el terreno de la confrontación verbal los ánimos entre las partes continúan manifestando un elevado tono. El hecho de que, a pesar del cese de la actividad militar ofensiva rebelde, los combates hayan continuado registrándose, ha dado paso a una guerra verbal de recriminaciones mutuas entre las partes, lo cual ha enrarecido adicionalmente el desarrollo de las negociaciones de paz en la presente etapa de resoluciones definitivas.

De esta suerte, según el viceministro de defensa, general Orlando Zepeda, el FMLN decidió lanzar su tregua unilateral "para (generar) efectos propagandísticos y tratar de reorganizar sus filas". Para Zepeda, asimismo, los enfrentamientos armados han continuado debido a que "sus combatientes no cumplen con lo que sus dirigentes prometen".

Los voceros del FMLN, en cambio, señalan que la continuación de los operativos contrainsurgentes responde a un "esfuerzo desesperado y oportunista" de la Fuerza

Armada para sacar ventaja de la tregua unilateral. Asimismo, el FMLN ha acusado al gobierno de implementar tácticas dilatorias y confrontativas de última hora en la mesa de negociación que, en combinación con un plan de terror psicológico de grupos fantasmas, retardan la llegada de la paz. No obstante ello, el FMLN ha reiterado que apoya todo gesto tendiente a desescalar el conflicto. En tal sentido, el comandante Herson Martínez, miembro del comité político del FMLN que opera clandestinamente en San Salvador, ha señalado que "frente a la respuesta del gobierno —de suspender el bombardeo y el fuego de artillería pesada—, el FMLN se declara en ofensiva de paz, en un esfuerzo de concertación" para poner fin al conflicto armado.

El intercambio de declaraciones públicas acusatorias entre ambas partes ha movido al mediador de la ONU en las negociaciones de paz, Alvaro de Soto, a formular reiterados llamamientos a la concordia. En ese marco, de Soto ha declarado que "las negociaciones por la paz en El Salvador no están por romperse, sino que atraviesan un momento difícil".

La dinámica militar en la segunda mitad de noviembre

Entretanto, la guerra, con todo y su sensible disminución, continúa mostrando dinámicos de destrucción. En el período comprendido del 16 al 30 de noviembre, los reportes de COPREFA registraron 13 combates de encuentro y 11 ataques rebeldes en seis departamentos del país. Tal accionar ocasionó, en términos de desgaste de las fuerzas vivas contendientes, 15 bajas (10 muertos y 5 heridos) entre los efectivos de la Fuerza Armada y 49 bajas (23 muertos y 26 heridos) entre los combatientes del FMLN.

La actividad militar se distribuyó geográficamente de la manera siguiente: Chalatenango, 3 combates de encuentro y 5 ataques rebeldes; Cuscatlán, 4 combates y 1 ataque; San Salvador, 1 combate y 2 ataques; La Paz, 1 ataque; Usulután, 4 combates y 1 ataque; Morazán, 1 combate y 1 ataque.

Tal y como puede apreciarse a simple vista, la mayor parte de los combates de encuentro se concentraron en los departamentos de Chalatenango y Cuscatlán, en el norte y el centro del país, así como en Usulután, en el sur-oriente. Igualmente, las acciones ofensivas rebeldes reportadas por COPREFA han ocurrido en estos territorios, particularmente en el área de Chalatenango. Según voceros del FMLN, tales acciones insurgentes han sido en repuesta a la incursión de las unidades del ejército en dichas zonas.

En Chalatenango, los principales combates de encuentro se suscitaron en el cantón El Gramal y otros puntos en las afueras de San Antonio Los Ranchos; en el cantón San Cristóbal (Tejutla); y en la periferia del poblado de La Reina. En Cuscatlán, por su parte, la actividad militar abarcó los contornos de Suchitoto, sobre todo en el cantón Ichanquezo y en el cerro El Cumbo. Otros combates se suscitaron en el cerro Tepechuchu, localizado en la comprensión de Tenancingo. En la zona oriental, los combates se libraron en las inmediaciones de San Francisco Javier y en el cantón Joya Ancha Abajo, de la jurisdicción de Santa Elena (Usulután).

Sensible disminución de la actividad militar

Los balances y reportes militares emanados de ambas fuerzas contendientes en los

primeros días de diciembre registran una clara disminución del accionar bélico.

Así, según los reportes de COPREFA, en los primeros diez días de diciembre se registraron únicamente 12 ataques rebeldes en 7 departamentos de país. Tal actividad militar ocasionó 7 bajas (1 muerto y 6 heridos) en los efectivos de la Fuerza Armada y 1 herido en las filas insurgentes.

Los ataques rebeldes se distribuyeron de la forma siguiente: en Cuscatlán, unidades del FMLN hostigaron a efectivos de la Primera Brigada de Infantería, en el cantón Plataneros (Suchitoto), en el caserío Los Lirios (San José Guayabal) y en las afueras de Tenancingo. En Chalatenango, las fuerzas rebeldes incursionaron en las afueras de los poblados de Santa Rita y La Palma. En Morazán, los ataques se concentraron en los alrededores de Perquín. En Cabañas, efectivos del Destacamento Militar Número 2 fueron emboscados en el caserío El Aguacate (Villa Victoria). En La Libertad, unidades insurgentes incursionaron en la localidad de Zaragoza, destruyendo las instalaciones de la comandancia local de la defensa civil. En San Salvador, el FMLN hostigó puestos del ejército en las inmediaciones del centro penal La Esperanza, en Mariona. Finalmente, en Usulután, unidades rebeldes atacaron el puesto de defensa de la Hacienda La Breña (Ozatlán), custodiado por efectivos de la Sexta Brigada de Infantería.

Por su parte, radio Farabundo Martí reportó, para el período comprendido entre el 2 y el 8 de diciembre, 38 acciones militares ofensivas (entre patrullajes y operativos) de la Fuerza Armada en los departamentos de Chalatenango, San Salvador, Cuscatlán, Cabañas, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión. En dichas ac-

ciones, la Fuerza Armada habría sufrido 34 bajas. La emisora reportó también 14 combates de encuentro, en los cuales el ejército sufrió 11 bajas. En las áreas conflictivas de Morazán, Guazapa (Cuscatlán) y Chalatenango, el ejército habría ejecutado 3 ataques artilleros con morteros 120 y 81 mm y obús 105. En un comunicado posterior, la Fuerza Armada admitió el uso de la artillería en el área de Guazapa y justificó la medida aduciendo que el fuego de morteros fue utilizado de forma defensiva.

En términos generales, la Fuerza Armada ha mantenido una actitud más hostil y beligerante en la presente etapa, previa a la llegada del cese de fuego definitivo. Además del mortero y de los patrullajes ofensivos, el ejército dificultó también la llegada de los comandantes de campo del FMLN, Chano Guevara y Ramón Suárez, al frente de combate en la zona del cerro de Guazapa. Los comandantes rebeldes retornaban de México de participar en el proceso negociador y fueron recibidos con intensos combates en horas de la madrugada del 2 de diciembre, al momento de su arribo a las zonas bajo control insurgente. Efectivos del batallón Atlacatl y de la Primera Brigada de Infantería habían militarizado los cuatro puntos que ONUSAL tenía preparados para el aterrizaje del helicóptero en que ambos comandantes eran transportados.

El cese de las acciones ofensivas rebeldes ha contribuido significativamente a desescalar la actividad militar. No obstante, para que la tregua rebelde se convierta en el anticipo de la paz es urgente que la Fuerza Armada responda con mayores medidas de reciprocidad. Hasta el momento, el estamento militar no ha mostrado mucha disposición a colaborar para el logro de la paz.

La marcha de la negociación: otra vez a Nueva York

El 25 de noviembre recién pasado, en la ciudad de San Miguel Allende, en Guanajuato, México, dio inicio una nueva ronda de negociaciones en busca de dar continuidad a un proceso sobre el que se ha venido creando la expectativa de su próxima conclusión antes de Navidad, con la firma de acuerdos definitivos. Es así que los delegados de ambas partes, desde el primer día de los renovados encuentros, concordaron en la posibilidad de que los mismos se conviertan en la "última ronda" de negociaciones.

Es en este sentido que Roberto Cañas, de la delegación rebelde, aseguró que la actual jornada sería un diálogo "hasta el tope". La delegación gubernamental, si bien no ha renunciado a aducir el falaz argumento de que el fin del conflicto estriba en la voluntad política del FMLN, también hizo expresa su valoración de que la ronda de San Miguel de Allende podría convertirse en la ronda final. Por su parte, la mediación, al iniciar los nuevos contactos, llamó a las partes a "estar preparados para negociar todos los temas". Es en este clima al interior de la mesa de negociación, sustentado por los avances relativos logrados en las dos rondas previas, que se dio inicio a la jornada de San Miguel de Allende.

Sin embargo, pese a los avances en el abordaje de los temas considerados en la agenda comprimida, y a los alentadores signos que la disminución del quehacer militar ha ofrecido, las negociaciones por la paz en El Salvador parecen enfrentarse a obstáculos y amenazas todavía graves. Los hechos que giran alrededor de las negociaciones muestran que el ritmo adquirido por el proceso tras la ronda de Nueva York ha sido

coyunturalmente desacelerado, en lo fundamental por las contradicciones internas que al gobierno le han implicado eventuales acuerdos definitivos. Es así que la recién pasada ronda (**Procesos 494-495**), como la actual, se han desarrollado en el contexto de un incrementado nivel de acusaciones mutuas sobre la responsabilidad del interlocutor en la posposición de la firma de acuerdos, y de un violento y amenazante acoso por parte de los sectores de la extrema derecha política y militar, amparados en la tradicional impunidad de la Fuerza Armada y escondidos tras organizaciones fachadas de los escuadrones de la muerte, como la Cruzada Pro Paz y Trabajo.

Es innegable que tales polémicas entre las partes, las preocupantes presiones y vociferaciones de la derecha escuadronera, así como las contradicciones internas en el gobierno y la Fuerza Armada, han revertido en volver más lento y confrontativo el proceso de negociación. Sin embargo, la hostilidad del ambiente no ha estancado completamente los debates y, pese a todo, ha sido posible lograr avances en algunos puntos. El haber logrado entrar en la actual ronda a la consideración del tema económico-social puede ser un buen signo de que, contra las exaltadas pasiones de la ultraderecha, anquilosada en el ejército y el gobierno, la negociación marcha.

Ya la ronda concluida el 15 de noviembre anterior había dejado claro que la Fuerza Armada, el permanente escollo de la negociación, es también el más grave obstáculo para una pronta firma de acuerdos definitivos. Así, la nueva ronda, en principio acordada para el 23 de noviembre, debía encarar

en lo fundamental lo concerniente a la conformación de la Policía Nacional Civil (PNC) y a la reducción de la Fuerza Armada, puntos largamente debatidos sin mayores resultados concretos.

El receso iniciado el 16 de noviembre coincidió con la entrada en vigor de la tregua unilateral decretada por el FMLN. La medida fue recibida con beneplácito por las fuerzas sociales y políticas del país y, el día 21, ante un sensible incremento de las presiones internas y externas, el presidente Cristiani anunció la decisión gubernamental de suspender los bombardeos aéreos y las acciones ofensivas de artillería pesada (**Proceso 495**). Decisión que, si bien va acorde con medidas de reciprocidad ante la tregua, fue considerada insuficiente por el FMLN y por distintas fuerzas sociales del país. Y ciertamente es insuficiente no sólo porque la reciprocidad deseable era un congelamiento total de las acciones del ejército, sino por otras razones. En primer lugar, porque el grueso de la actividad castrense lo constituyen las operaciones de infantería, acompañadas por artillería de apoyo y, en segundo, porque en el tipo de guerra que se ha librado en nuestro país, la artillería pesada como la aviación, o se han mostrado ineficaces para definir una determinada dinámica y correlación de fuerzas militares, o han sido neutralizadas a partir de reacomodos en las modalidades operacionales del FMLN.

Desde el momento de su entrada en vigor, la tregua comenzó a convertirse en punto de polémicas y acusaciones mutuas en torno a la buena voluntad y conducta de la otra parte para viabilizarla. Discusiones que llegaron a enrarecer a tal grado el ambiente de la negociación hasta poner en peligro la continuidad de la tregua.

El gobierno y la Fuerza Armada, por su parte, si bien reconocieron una disminución sustantiva de las acciones armadas, asegu-

raron que la tregua no había sido acatada en su totalidad por las fuerzas rebeldes. Pero la negativa actitud de desmérito a la tregua por parte del ejército fue aún mayor. El 22 de noviembre, el general Juan Orlando Zepeda, viceministro de defensa, haciéndose eco de la postura sostenida por otros militares y políticos del ala más derechista, aseguró que la "tregua permite al FMLN reorganizar sus fuerzas...es una medida para efectos propagandísticos...y la lanzan cuando sus fuerzas están llegando a la desarticulación total. Por medio de ella buscan un compás de espera intentando convencer de nuevo a su gente para que emprendan acciones de envergadura".

Paralelamente, ante las gestiones y llamados para que corresponda a la altura de la medida guerrillera, la Fuerza Armada ha venido eludiendo cualquier compromiso amparándose falazmente en el mandato constitucional que le delega salvaguardar el orden y la seguridad del país. Es en este sentido que el coronel Oscar León Linares, comandante del Destacamento Militar N° 4 de Morazán, coincidiendo con lo expresado por otros mandos castrenses, aseguró que los "operativos continuarán el tiempo que sea necesario". Partiendo también de ese argumento, el gobierno ha llegado a manifestar que es un deber del ejército mantener sus acciones y que si las fuerzas del FMLN quieren evadirlas, que las evadan. También incrementó sus ataques contra los rebeldes, acusándolos de fomentar la intranquilidad y de estar cobrando impuestos de guerra a los caficultores, lo cual haría más necesaria la presencia del ejército en todo el país.

Finalmente, ante las protestas del FMLN por la poca colaboración del gobierno y la Fuerza Armada para generar un clima propicio para las conversaciones, y la consecuente advertencia de dar por concluida la tregua, el 28 de noviembre, el coronel Mauri-

cio Vargas, aseguró que aquéllas eran producto de "la impaciencia y desesperación... pues ha llegado el momento de tomar la decisión de desmovilizarse y desarmarse".

El FMLN, por su parte, desde un primer momento, al conocer la decisión gubernamental de cesar acciones militares para ellos de importancia no sustancial, demandó medidas de estricta reciprocidad. De esta suerte, el día 22 de noviembre, al tomar postura frente a la medida, el comité político rebelde que funciona dentro del país la calificó de "positiva, pero insuficiente...no está a la altura de las necesidades. Pues no se trata de ganar la guerra, sino la paz".

Ya para el 19 de noviembre, ante una serie de enfrentamientos suscitados, organismos sindicales expresaron sus temores de que la actitud de la Fuerza Armada de no responder con reciprocidad pudiera revertir en un rompimiento de la tregua. Por su parte, el Dr. Rubén Zamora, de la Convergencia Democrática, calificó los enfrentamientos como "golpes bajos a la negociación". Sin embargo, pese a los expresos temores y a las exhortaciones, la Fuerza Armada siguió aferrándose a su tesis del deber constitucional, y los enfrentamientos, si bien en menor escala, han seguido verificándose.

Adicionalmente, en el clima de polémicas que sucedió a la implementación de la tregua, el FMLN acusó a la Fuerza Armada de estarse aprovechando de la medida unilateral. De acuerdo a los rebeldes, el ejército se ha valido de la tregua para lanzar operaciones y tomar posiciones en zonas de tradicional control o influencia guerrillera, lo cual constituye una seria provocación pues obliga al FMLN a defender sus retaguardias. Se trataría, según esto, de una maniobra similar a la ejecutada a finales de 1986 con ocasión de los acuerdos de Esquipulas, cuando el ejército aseguró que realizaría un repliegue de fuerzas para viabilizar el cese de fuego

unilateral al que se había comprometido el gobierno del entonces presidente Duarte. Sin embargo, antes que tal repliegue, lo que se impulsó fue un forzado despliegue de posiciones hacia áreas de control rebelde, haciendo mucho más difícil cualquier tipo de cese de fuego. Y ciertamente, los reportes de COPREFA sobre las acciones militares ocurridas en las últimas semanas parecen confirmar la versión rebelde, pues las mismas aparecen registradas en las áreas de tradicional control o influencia guerrillera.

Es también en este clima de polémicas, y como fruto del mismo, que la vigencia de la tregua se vio amenazada. A un día de haber comenzado las negociaciones en San Miguel de Allende, la comandante Ana Guadalupe Martínez, de la delegación rebelde, señaló que, ante las incursiones del ejército a sus zonas, no era posible asegurar por cuánto tiempo se podría mantener la situación. Un día después, el 27 de noviembre, Miguel Saéñz reafirmó la posibilidad de romper la tregua y arguyó que el FMLN "tiene el derecho de responder militarmente para mantener la fuerza que hace posible la negociación". El día 28, diversos miembros de la delegación rebelde exhortaron al gobierno a implementar medidas recíprocas para salvar la tregua. Por su parte, el comandante Joaquín Villalobos apuntó que la tregua sólo podría funcionar si se daban medidas recíprocas y aclaró, ante la pretensión castrense de ocupar territorios, que al FMLN "no le interesa hacer división territorial, sino una separación geográfica de fuerzas...que respeta la unidad del Estado" y garantice la ausencia de encuentros de fuerzas que pongan en grave riesgo la vigencia de la tregua.

Los otros dos puntos de polémicas ya al interior de la mesa han sido los concernientes a la conformación de la nueva Policía Nacional Civil (PNC) y a la reducción de la

Fuerza Armada, puntos que han venido haciendo difícil entrar a la consideración de otros temas desde encuentros anteriores. El gobierno y la Fuerza Armada, desde antes de iniciarse la ronda de San Miguel de Allende, insistieron mucho en que el nuevo cuerpo de seguridad no tenía sillas reservadas para el FMLN. El mismo vicepresidente, Sr. Francisco Merino, rechazó la pretensión de los rebeldes de tener presencia masiva en la PNC. Por su parte, ante la insistencia gubernamental, el comandante Villalobos señaló que la participación del FMLN en la PNC es una "condición necesaria para la paz" y que su "incorporación a todos los niveles" es una exigencia en base a los acuerdos de Nueva York.

Es en este contexto que, el día 27, la mediación de las Naciones Unidas presentó una nueva propuesta sobre la PNC, orientada a superar las discrepancias existentes.

En lo que al problema de la reducción del ejército se refiere, las posturas parecen haber continuado invariables. Mientras el gobierno propone la adopción de algunos criterios de reducción que se limitarían a definirla como una consecuencia natural tras la firma del cese de fuego definitivo, el FMLN demanda se precise la dimensión a que se reduciría y se establezca un calendario de implementación del acuerdo, vinculado al proceso de reinserción de los contingentes rebeldes a la vida civil.

Finalmente, un último elemento que contribuyó a la conformación del enrarecido ambiente, fue la agresiva y amenazante campaña propagandística lanzada contra el proceso de paz por sectores de extrema derecha incrustados en la Fuerza Armada y el gobierno de ARENA. En tal campaña se continuó acusando al presidente Cristiani de "traidor" y se pasó a amenazar a corresponsales extranjeros, miembros de ONUSAL, políticos salvadoreños y a un ciudadano es-

tadounidense. A las vociferaciones y amenazas de la Cruzada pro Paz y Trabajo y del Frente "Mayor Azmitia", se sumaron la auto-denominada Coordinadora Cívica pro Defensa de la Democracia, y el Frente Anticomunista Salvadoreño (**Proceso 496**), que exigió a sus amenazados que abandonaran el país. Los viscerales editorialistas de El Diario de Hoy también han contribuido a la campaña.

Si bien el gobierno y el propio partido ARENA han debido enfrentarse a tales organizaciones fantasmas de manera más decidida que antes, calificándolos incluso de "grupos antidemocráticos" y "enemigos de la paz", y haciendo un llamado a la ciudadanía para que apoye el proceso con el fin de que estos grupos no puedan obstaculizarlo, también es cierto que la Fuerza Armada ha desplegado campos pagados en los que califica a los combatientes del FMLN como "maleantes" y "enemigos nocivos de la democracia".

Ante este clima difícil generado por las polémicas entre las partes y las contradicciones en el gobierno, el 28 de noviembre el mediador Alvaro de Soto expresó su preocupación por la "guerra de discursos en medio de la negociación". Según el mediador, la etapa actual del proceso requiere mucha flexibilidad; por ello, demandó esfuerzos de moderación a cada parte. Dos días después, hizo un nuevo llamado a limitar el debate público. A su vez, frente a la expectativa creada de la suscripción de acuerdos definitivos a mediados de diciembre, De Soto señaló que "no existen fechas" fijas, pero agregó que la firma de tales acuerdos es "técnicamente factible y debería ser políticamente realizable".

Las partes, en tanto, convinieron en acelerar las negociaciones para evitar una eventual desestabilización del proceso y, a instancias del FMLN, las reuniones se intensificaron. Ya para la primera semana de di-

ciembre, el jefe de la delegación gubernamental, Dr. Oscar Santamaría, aseguró que había avances importantes en lo referente a la reducción del ejército e integración de la PNC. Se supo también que se acordó entrar a la consideración del tema económico-social y que los primeros debates sobre tal contenido ya se estaban realizando.

Como es sabido, desde la firma de los acuerdos de Nueva York, en septiembre de este año, ambas partes han venido coincidiendo en que el proceso se encuentra en la "recta final". Sin embargo, tal recta final no ha estado limpia de tómulos y baches que han dificultado la celeridad del proceso. Desde los viscerales y amenazantes pronunciamientos de la ultraderecha escuadroneira, escondida detrás de grupúsculos delirantes como la Cruzada pro Paz y Trabajo, pasando por la irracional negativa del gobierno a corresponder con la tregua unilateral del FMLN, hasta llegar a la publicitada "marcha por la paz", del pasado 8 de diciembre, con la que la Fuerza Armada ha pretendido justificar sus intransigentes posiciones en la mesa de negociación, muchos han sido los tropiezos y retrasos del proceso pacificador.

De esta suerte, si bien se ha avanzado, y se ha avanzado mucho, la enrarecida atmósfera descrita venía haciendo necesario un nuevo y definitivo impulso de la comunidad internacional. Es en este sentido que, entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre, la Comunidad Europea, así como Estados Unidos y la URSS, emitieron comunicados manifestando su preocupación por la continuación de la violencia en El Salvador y exhortando a las partes a firmar el cese de fuego definitivo antes de con-

cluir el año.

Finalmente, es también en ese sentido que el Secretario General de la ONU, Dr. Javier Pérez de Cuéllar, invitó una vez más a las partes a trasladar las conversaciones a la sede de la máxima instancia mundial en Nueva York. Ciudad que puede ser, como ya lo fue antes, el lugar más propicio para reorientar y dinamizar la etapa final de las negociaciones.

La invitación fue inmediata e irreflexivamente rechazada por el presidente de ARENA, Dr. Armando Calderón Sol, aduciendo que tal paso no era necesario en el momento actual de la negociación. A tono con esta posición, el vicepresidente Merino, contradiciendo los objetivos expresos de su gobierno de firmar la paz antes de terminar el año, insinuó que el Dr. Pérez de Cuéllar estaba tratando de forzar acuerdos. Sin embargo, el gobierno ha acabado aceptando la invitación.

Ambas delegaciones, separadamente, han coincidido en que ésta será la "ronda definitiva de diálogo", apreciación en lo fundamental también compartida por el mediador Alvaro de Soto. Empero, los escollos por superar son aún grandes y las fuerzas opuestas a la solución negociada, aunque cuantitativamente mínimas, siguen siendo poderosas. Por lo pronto, resta esperar el desarrollo y resultados que vayan surgiendo en la nueva cita en Nueva York. La presencia de Pérez de Cuéllar en las reuniones, la intensa presión internacional, así como la meta expresa de firmar el cese de fuego antes de concluir el año, son signos alentadores que podrían presagiar una pronta firma de la paz en el país.

Los salvadoreños ante los procesos de privatización y de paz en el país

Entre el 12 de octubre y el 2 de noviembre de 1991 el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", realizó una encuesta nacional, con el propósito de conocer la opinión pública sobre la situación económica del país y la política de privatización del gobierno. Otra sección del cuestionario se dedicó al tema de la pacificación, el papel de ONUSAL y el enjuiciamiento popular sobre el caso jesuitas.

La encuesta se cursó en 12 de los catorce departamentos del país, conteniendo preguntas tanto de estructura abierta como cerrada, y se ejecutó por aproximación a hogares. La muestra, constituida por 1,243 boletas válidas, se diseñó en base a una estratificación proporcional dividida en cuatro sectores sociales urbanos y una categoría independiente como sector rural.

Encuesta del IUDOP: El proceso de privatización y de paz en el país octubre de 1991

I. La política de privatización:

¿Cree usted que la situación económica del país esté mejor, igual o peor que hace un año?

Está peor	65.0%
Está igual	21.8%
Está mejor	11.6%

¿Cree usted que con la privatización, los problemas del país se van a solucionar, van a quedar igual o van a ir cada vez peor?

Van a ir cada vez peor	44.2%
Van a quedar igual	20.0%
Se van a solucionar	16.3%
No sabe/no responde	18.9%

¿A quién considera usted que beneficia más de la política de privatización?

A los capitalistas (sector privado) y grupos privilegiados	46.8%
Al gobierno	14.3%
A todo pueblo	12.0%
Otras respuestas	6.9%
No sabe/no responde	20.0%

¿Y a usted personalmente lo beneficia o lo daña la política de privatización?

Lo daña	36.6%
Se siente ajeno a la privatización, ni dañado ni beneficiado	36.3%
Lo beneficia	6.8%
No sabe/no responde	20.0%

II. El costo de la vida:

¿Cómo ha visto usted los precios de los productos básicos durante este año? ¿Han subido excesivamente, considerablemente, poco o muy poco?

Excesivamente	67.1%
Considerablemente	20.9%
Poco	9.5%
Muy poco	1.9%
No sabe/no responde	0.6%

¿Cree usted que los salarios mínimos del país alcanzan o no alcanzan a cubrir los gastos del trabajador y su familia?

No alcanzan	78.6%
No alcanzan para nada	16.1%
Alcanzan	4.0%
No sabe/no responde	0.6%

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno intervenga en controlar los precios de los productos básicos de la población?

De acuerdo	82.6%
En desacuerdo	14.7%
No sabe/no responde	2.3%

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con el cierre del IRA ejecutado por el gobierno?

En desacuerdo	64.7%
De acuerdo	23.8%
No sabe/no responde	11.0%

III. El problema energético nacional:

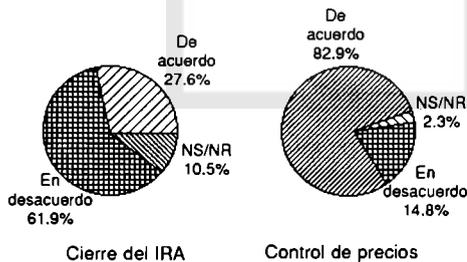
¿Por qué cree usted que se está racionando la energía eléctrica?

Por falta de agua, falta de lluvia	38.3%
A causa del sabotaje, pérdidas causadas por la guerra	14.1%
Porque la venden a otro país (Guatemala)	12.6%
Es negocio, intereses del gobierno, sólo ellos saben	11.7%
Para economizar energía, quieren llenar las presas	3.5%
Para justificar el alza en la tarifa	2.7%
Para abastecer de energía a todo el país	2.2%

¿Considera usted justificada el alza en la tarifa del servicio eléctrico?

No	73.9%
Sí	16.2%
No sabe/no responde	9.2%

Relación entre opiniones sobre el cierre del IRA y el control de precios



¿Por qué considera injustificada el alza en la tarifa eléctrica?

El aumento es excesivo, injusto	50.8%
No se alcanza a pagar, salarios muy bajos	13.8%
Daña al pueblo, a todos	9.2%
Otras respuestas	26.2%

¿Por qué considera justificada el alza en la tarifa eléctrica?

Por los costos, compensar pérdidas	34.8%
------------------------------------	-------

Por el sabotaje	25.9%
Otras respuestas	39.3%

¿Considera usted que debería privatizarse la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)?

No	58.1%
Sí	18.6%
No sabe/no responde	23.2%

¿Por qué piensa que CEL no debe privatizarse?

Porque aumentaría las tarifas eléctricas	29.1%
Es un bien del pueblo, sólo beneficiará a privilegiados	23.1%
Habría más crisis, todo se encarecería	15.9%
Está funcionando bien, se limitaría el servicio	11.9%
Otras respuestas	20.0%

¿Por qué piensa que CEL debe privatizarse?

La empresa privada funciona mejor	49.4%
Tal vez cobran menos, quizá funcione mejor	23.4%
Ya no quitarían la energía	11.3%
Otras respuestas	15.9%

IV. El caso jesuitas

¿Ha oído hablar de la vista pública en el caso de los jesuitas y del veredicto?

Sí	74.2%
No	20.1%
No sabe/no responde	4.7%

A quienes manifestaron tener conocimiento de la vista pública en el caso jesuitas, se les preguntó si la habían visto por la televisión:

Sí	55.1%
No	44.9%

A quienes manifestaron tener conocimiento de la vista pública en el caso jesuitas, se les preguntó si creían que hay otros responsables no procesados:

Sí	62.4%
No	11.7%
No sabe/no responde	25.9%

¿A quienes manifestaron tener conocimiento de la vista pública en el caso jesuitas, se les preguntó si creían que debería hacerse algo más para investigar y juzgar a otros responsables?

Sí	75.8%
No	7.2%
No sabe/no responde	17.0%

¿Qué piensa usted de un posible perdón o amnistía?

No tiene que darse	41.2%
Estaría bien un perdón	19.5%
Es posible que los perdonen	2.8%
Sólo Dios sabe	1.8%
Otras respuestas	3.6%
No sabe/no responde	28.7%

V. El proceso de paz y ONUSAL

¿Ha oído usted hablar de los acuerdos de paz firmados en Nueva York?

Sí	71.5%
No	24.7%
No sabe/no responde	2.9%

¿Cree usted que la paz está realmente próxima a partir de dichos acuerdos?

No	51.7%
Sí	32.0%
No sabe/no responde	16.3%

¿Quién ha hecho más por el logro de estos acuerdos?

Los tres por igual	36.4%
El gobierno	19.3%
La ONU	18.1%
El FMLN	2.7%
Ninguno	3.1%
No sabe/no responde	19.8%

¿Cuál es el tema más importante que el diálogo debe resolver?

Reformas económicas	30.0%
Transición del FMLN a la sociedad civil	16.7%
La reducción de la Fuerza Armada	13.5%
La depuración de la Fuerza Armada	10.2%
El sistema judicial	4.7%
El cese al fuego	2.7%
Resolver todos los problemas	4.7%
Otras respuestas	7.9%
No sabe/no responde	9.6%

Considera usted que el financiamiento militar de Estados Unidos a el Salvador debe continuar, incrementar, ser suspendido temporalmente o ser suspendido definitivamente?

Debe ser suspendido, temporal	
definitivamente	46.3%
Debe continuar	31.2%
Debe incrementar	3.6%
Otras respuestas	2.7%
No sabe/no responde	16.2%

¿Sabe usted donde se encuentra la oficina más cercana de ONUSAL?

Conoce el departamento	8.5%
Sabe con precisión	8.1%
Conoce la región	1.2%
No hay	4.4%
No sabe/no responde	77.1%

¿Cuál es la tarea de ONUSAL?

Defender, velar por los derechos humanos	30.0%
Verificar los acuerdos de Nueva York, ser mediador	7.2%
Otras	10.5%
No sabe/no responde	52.3%

¿Cree usted que ONUSAL es una organización neutral o parece inclinada en favor de alguna de las partes?

Es neutral	49.7%
Parece inclinada en favor de una u otra parte	6.7%
No sabe/no responde	42.7%

VI. Evaluación del gobierno:

Opinión sobre los servicios públicos:

	mejo- rado	igual	em- peo- rado	NS/ NR
Servicios de transporte	23.0%	35.3%	37.0%	1.9%
Educación Pub.	21.6%	35.1%	37.0%	4.8%
Asistencia hospít.	19.7%	28.7%	42.3%	6.5%
Abastecimiento de granos básicos	11.8%	25.4%	55.3%	4.8%

Actualmente, las instituciones autónomas CEL, ANDA y ANTEL, ¿le parecen más eficientes, iguales o menos eficientes que hace un año?

Más eficiente	19.0%
Igual	46.5%
Menos eficientes	29.6%

Hay menos guerra, ha trabajado por la paz	42.8%
Tiene buena intención trabaja mejor	15.3%
No hay corrupción	7.4%
Otras respuestas	34.5%

Comparativamente, ¿cuál gobierno le ha parecido mejor: el actual o el anterior?

El anterior	36.2%
El actual	27.3%
Son iguales	21.3%
Ninguno	6.6%
No sabe/no responde	8.5%

¿Por qué le ha parecido mejor el anterior gobierno?

Los productos estaban menos caros, había menos hambre	29.8%
Era más con los pobres, luchó por el pueblo	29.8%
Fue él que inició la democratización, era más democrático	12.2%
Otras respuestas	28.2%

¿Por qué le ha parecido mejor el actual gobierno?

